

El método de investigación de la academia activista: un desafío, pero indispensable

Lorenza Arango

En algunos contextos, tal vez la mejor manera de realizar investigación en ciencias sociales sea la de entablar acuerdos de colaboración con grupos sociales con cuya visión simpatizamos ampliamente. Sin embargo, el desafío está en que podríamos estar apoyando y defendiendo políticamente las mismas prácticas sociales que estudiamos. ¿Esto hace que mi investigación sea sesgada? Como muchos otros profesionales del desarrollo, no pretendo practicar una investigación desinteresada. En últimas, los compromisos éticos y políticos influyen permanentemente nuestra práctica: por qué estudiamos ciertos fenómenos y no otros, por qué consideramos algunos como problemas y otros no. Así pues, ninguna investigación en ciencias sociales es políticamente neutral; siempre tiene un sesgo. Pero cierto sesgo político y el rigor científico son dos cosas diferentes. Reconocer que la investigación social es sesgada no implica falta de rigor. Como académicos-activistas, nuestro deber es asegurar que las visiones con las que nos identificamos también estén sujetas al escrutinio teórico y la revisión por pares, y practicar una divulgación honesta. Los desafíos son enormes. Por ejemplo, ¿se puede estar en desacuerdo con un colaborador local? ¿El activismo académico significa que “todo vale” en términos de aceptar de manera acrítica todo lo que afirman los investigadores locales? Mientras colaboraba con la organización claretiana Norman Pérez Bello (los Claretianos, para abreviar) en los llanos orientales de Colombia aprendí sobre la práctica a menudo desafiante del activismo académico, así como lo indispensable que resulta hoy en día.

Nos encontrábamos en medio de la temporada de lluvias de 2022 en la región de la Altilanura.

Anita, miembro de la organización claretiana y líder de la visita de campo, se enfrentaba a una difícil decisión: cancelar la visita a mitad de camino, con varias de las tareas que habíamos acordado aún incompletas, o trasladarnos a otra área dentro de la región para finalizar nuestra misión. Las fuertes lluvias habían vuelto intransitables varios de los caminos; y navegar por el río Meta hasta llegar a nuestro próximo destino parecía la única salida. Aun así, el viaje por río planteaba otras preocupaciones de seguridad, especialmente para organizaciones sociales como los Claretianos, cuyos miembros se han convertido en blanco de amenazas y persecución.

“¿Cómo quieres proceder? ¿Suspendemos la visita?”, pregunté.

“Déjame pensarlo... La gente ya nos está esperando”, respondió Anita.

Fueron horas de conversación telefónica con miembros de las comunidades que íbamos a visitar y con el responsable de la organización claretiana, para validar las condiciones de seguridad en la zona. La decisión estaba tomada: subirnos al primer barco que salía a las 4:00 am, y permanecer juntos y alertas durante las aproximadamente 8 horas de viaje.



El paisaje de sabana en Puerto Gaitán, Meta. Foto de la autora, junio 2022.

En los últimos años, la subregión de la [Altillanura](#) en Colombia (que abarca el departamento de Vichada y partes del Meta) se convirtió en un importante destino fronterizo para lucrativas inversiones en tierras. En un corto período de tiempo, la región pasó de ser un paraje lejano, disperso y poco desarrollado de sabanas tropicales que limitaban con Venezuela a convertirse en la mayor y [“última frontera agrícola”](#) del país e incluso en la nueva [“tierra prometida”](#).

La Altillanura colombiana fue parte de un fenómeno global de acumulación de tierras de carácter espectacular y multifacético en todo el mundo conocido como la [“fiebre mundial por la tierra”](#). Alrededor de 2004 y 2017, en la zona [se llevaron a cabo](#) múltiples transacciones de tierras por parte de empresas. Otras transacciones de tierras fueron suspendidas en las primeras etapas de implementación o nunca llegaron a concretarse, y sin embargo contribuyeron a [alimentar el frenesí](#) por invertir. Al mismo tiempo, la acumulación de tierras fraudulenta y realizada por actores de bajo perfil avanzó a un ritmo vertiginoso, fruto del efecto de arrastre provocado por la [fiebre por la tierra](#).

Para los pueblos indígenas y el campesinado que habitan la Altillanura, las sabanas tropicales no eran un lugar de inversión, sino sus lugares de residencia y su principal fuente de sustento. Desde hace décadas, ambas comunidades han sufrido los efectos de múltiples oleadas de [despojo de tierras](#) y desplazamiento forzado por parte de diferentes actores (entre quienes se cuentan el Estado, élites económicas, grupos armados guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares). La reciente fiebre por la tierra en la zona y la consiguiente crisis social y ambiental exacerbaron aún más las precarias condiciones de vida que experimentan estas comunidades, convirtiéndolas en el estrato más pobre de la población rural.



Cocina improvisada en el asentamiento indígena 'Iwitsulibo' (Puerto Gaitán, Meta). Fotos de la autora, junio de 2022.

En este contexto, resulta fundamental la labor que realiza la [Corporación Claretiana Norman Pérez Bello \(CCNPB\)](#), una organización colombiana sin ánimo de lucro que trabaja por la justicia social y la paz, y acompaña a comunidades campesinas e indígenas que hacen valer sus derechos a través de mecanismos no violentos. La Corporación ofrece asesoría jurídica, apoyo psicológico, pedagógico y de comunicaciones. Desde aproximadamente 2003, los Claretianos han apoyado de manera continua los esfuerzos de diferentes comunidades rurales por mejorar sus condiciones de vida en los llanos orientales de Colombia y en otras regiones del país. A día de hoy son quizás la única organización en la zona cuyo trabajo en defensa de las comunidades rurales ha resistido la prueba del tiempo y la brutalidad de diversas formas de violencia, incluidas la persecución a sus propios miembros y las amenazas contra sus vidas.

Como investigadora de doctorado en el proyecto [RRUSHES-5](#), financiado con una subvención avanzada del Consejo Europeo de Investigación (ERC), con sede en el [Instituto Internacional de Estudios Sociales \(ISS\)](#) de la Universidad Erasmus de Róterdam, me complace haber colaborado con los Claretianos y haber aprendido de primera mano del trabajo que realizan en la Altillanura. Mi primer acercamiento con su trabajo se produjo cuando me encontré por casualidad con unas breves publicaciones en línea de la organización, en las que denunciaban recientes casos acaparamiento de tierras que se estaban produciendo en la zona y sus efectos sobre los pueblos indígenas Sikuni. Luego me enteré de la organización por otros investigadores y periodistas de investigación, y me convertí en una admiradora de su trabajo.

Sobre la base de acuerdos de colaboración, los Claretianos facilitaron una parte importante de mi trabajo de campo en la Altillanura para mi tesis doctoral. Juntos visitamos lo que se habían convertido en sitios clave de inversión por parte de grandes corporaciones y élites políticas y económicas en el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta y de La Primavera y Santa Rosalía en Vichada. Escuchamos a la gente relatar duras historias de despojo asociadas a la

fiebre inversora y las consecuencias de la pérdida de tierras para sus medios de vida, y las [documentamos](#).

Mientras colaboraba con los Claretianos, las aparentes fronteras entre la investigación académica y el activismo de repente se tornaron menos rígidas.



Camino a visitar comunidades indígenas en Puerto Gaitán, Meta, atravesando quebradas y bancos de sabana. Fotos de la autora, junio de 2022.

En varias ocasiones, inevitablemente realicé tareas más cercanas a la labor de [incidencia política](#), lo que claramente influyó en los resultados de mi investigación. Por ejemplo, en la mayoría de los sitios de campo que visitamos, colaboré en la organización de reuniones y asambleas entre miembros de las comunidades indígenas y funcionarios gubernamentales, con la esperanza de que pudieran conducir a una mejor respuesta a los desafíos que experimentaban los indígenas (por ejemplo, en términos de su acceso a la tierra y sus condiciones de vida). También ayudé a redactar comunicados de prensa que denunciaban situaciones de abuso y amenazas de coerción por parte de la policía local y grupos armados ilegales contra miembros de la comunidad y los claretianos, y que exigían al Estado que garantizara los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. También ideé algunas herramientas que podrían ayudar a fortalecer el poder de decisión de los indígenas frente a las autoridades estatales, como mapas impresos de sus territorios.



Asamblea entre comunidades indígenas de los llanos orientales y funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras en La Primavera, Vichada. Fotos de la autora, marzo de 2023.

Al mismo tiempo, la colaboración permitió a los Claretianos sistematizar muchas de las evidencias que habían recopilado a lo largo de los años sobre las condiciones de acceso a la tierra en la Altillanura, así como llegar a un público más amplio, a través de informes y otras [publicaciones](#) que surgieron de nuestra asociación.

Por supuesto, las experiencias de [activismo académico](#) como la que aquí describo no están exentas de desafíos. ¿Cómo podían ambas partes garantizar que el proyecto de investigación que yo representaba fuera útil e impactara positivamente a la gente en el territorio? ¿Qué otras estrategias de investigación debía emplear para validar las conclusiones que surgieran del trabajo colaborativo, además del trabajo de campo? Asimismo, ¿eran los claretianos, dado su conocimiento del área y de las comunidades que acompañan, los autorizados a establecer los objetivos y los términos de nuestra colaboración? ¿Podía yo objetar las prácticas de la organización o estar en desacuerdo con el comportamiento de algunos de sus miembros mientras estaba en el campo? Si era así, ¿podría eso poner en riesgo nuestra colaboración o comprometer resultados particulares de esta? Al final, tanto los miembros de la organización como yo tuvimos que lidiar con estas preguntas y varias otras contradicciones que surgieron en el camino.

En definitiva, el mensaje subyacente es claro: en contextos de despojo de tierras generalizado, como el que está dando forma a la Altillanura colombiana, las luchas por la tierra siguen siendo un eje clave de movilización social en la actualidad. Ello hace del activismo académico una tarea y un método de trabajo analíticamente crucial y políticamente inspirador, a pesar de (o incluso debido a) las dificultades que lo rodean.

Hoy en día, en el ámbito académico, [la investigación con un impacto social positivo](#) ha ganado un apoyo significativo. A menudo, la interpretación de lo que esto significa sugiere que el trabajo académico impacta y transforma la sociedad y los actores sociales. Esto es ciertamente válido e importante. Pero en mi caso, otra dimensión también es clara: los actores sociales no académicos pueden impactar y transformar profundamente a los académicos y al trabajo académico. Aunque

la primera dimensión recibe atención en los círculos académicos, lo cierto es que la segunda dimensión se discute muy poco. Sin embargo, creo que es igualmente importante pensar en cómo los actores sociales no académicos, especialmente los activistas en pro de la justicia social como Anita y sus colegas Claretianos, impactan y transforman positivamente a los investigadores académicos como yo y, en esa medida, a la academia y el trabajo académico en el que estoy inmersa. Y eso me parece alentador.

Lorenza Arango es investigadora de doctorado en el Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS, La Haya) de la Universidad Erasmus de Róterdam. Hace parte del equipo de investigación del proyecto “*Commodity & Land Rushes and Regimes: Reshaping Five Spheres of Global Social Life (RRUSHES-5)*”, financiado con una subvención avanzada del Consejo Europeo de Investigación (ERC) y dirigido por Jun Borras. Como parte de este proyecto, Lorenza estudia las interacciones entre el fenómeno contemporáneo de acaparamiento de tierras y las esferas del trabajo y los alimentos, así como las relaciones entre el Estado y la ciudadanía en Colombia.